

Las renovables españolas recurren al 'crowdlending' para convertir al ecologista en prestamista: así opera la inversión ciudadana que arrasa en Europa

La creciente conflictividad social alrededor de los parques 'verdes' y el auge de normas estatales y regionales que premian la participación local en los proyectos de energía limpia impulsan esta tendencia



La Justicia gallega frena otros tres parques eólicos, de Iberdrola y Greenalia, en pleno pulso entre el sector y la Xunta

Por qué las grandes eléctricas invierten cada vez más en que usted pague cada vez menos: "Retener al cliente siempre es más barato que captar uno nuevo"

PAULA MARÍA
LUCÍA MARTÍN | MADRID

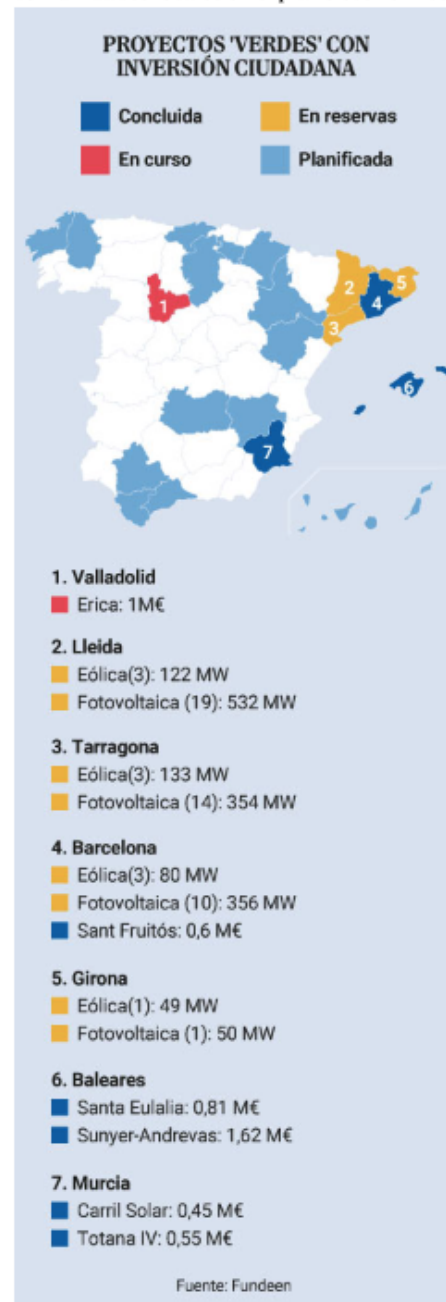
01/12/2024 10:47



Más que la lentitud burocrática, que la lentitud burocrática, que una curva de precios cada vez más descendente, o que los cuellos de botella que cada seis meses causan sudores fríos a los promotores. Hoy, el verdadero temor de las empresas de renovables en España es una escalada de conflictividad ciudadana que amenaza con bloquear sus proyectos, bien por la vía administrativa, bien por la judicial. Los promotores están adaptando sus procesos con fórmulas cada vez más creativas para lidiar con el auge del fenómeno NIMBY (*Not In My Back Yard*), "no en mi patio trasero", es decir, la oposición de una comunidad social a proyectos que alteren su entorno.

La consultora **Inés Monroy**, CEO de Licencia Social Energy, firma especializada en asesorar a los proyectos verdes para lograr el apoyo de las comunidades locales, corrobora este escenario, es más, asegura que el riesgo de que la falta de apoyo social influya en los responsables de las licencias administrativas es ya la principal preocupación del sector en España. "Está ocurriendo en el contexto de autoridades municipales y autonómicas y se llama efecto NIMBY, lo que se traduce en la falta de aprobación de proyectos mientras se está en el cargo si puede repercutir en la reelección", analiza.

Ya no es suficiente con que eólicas y fotovoltaicas contrarresten la ocupación de grandes extensiones de terreno con el arreglo de la pista forestal del pueblo o con una aportación fiscal suficiente como para construir un nuevo polideportivo. Vecinos, asociaciones e industria autóctona exigen mecanismos participativos que les den voz (y dividendos) en la transición energética. En consecuencia, cada vez más empresas de energía limpia están abriendo la puerta de sus parques a las comunidades locales en el plano económico.



Algunas compañías lo han hecho de motu proprio, otras, la mayoría, empujadas por cambios regulatorios impulsados por el Gobierno central y por las Comunidades Autónomas. La primera región en aprobar una norma para exigir a los promotores ofrecer a inversores locales una parte de los parques de cierto tamaño, concretamente el 20% de los mismos, fue Baleares en 2019. En 2021, Cataluña siguió su estela y, en 2022, a ambas se sumó Navarra. Si bien, la verdadera eclosión de este tipo de normas se ha producido este mismo año, cuando País Vasco, Canarias y Galicia han ajustado su regulación en aras de una mayor participación de grupos de interés locales en los proyectos.

Este es el caldo de cultivo que ha hecho despegar a nivel nacional una estrategia que lleva años triunfando en buena parte de Europa: la coinversión ciudadana. Se trata de una vía de financiación alternativa, generalmente dirigida a grupos de interés cercanos al lugar en el que se asientan los parques, que permite a vecinos, empresas locales o ayuntamientos inyectar recursos en los proyectos para, una vez en marcha, participar también de sus beneficios.

La receta es convertir al activista en prestamista o, incluso, en accionista para mejorar la percepción de las renovables. El puente entre los agentes locales y los promotores, en muchos casos, lo extienden los proveedores de servicios de financiación participativa, una figura supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está viviendo la antesala de su belle époque en nuestro país.

Los registros oficiales de la CNMV dan cuenta de 25 de estas sociedades, en su mayoría, aprobadas recientemente, a partir del último trimestre de 2023. Para analizar esta tendencia, *Actualidad Económica* ha conversado con **Fundeen**, la primera plataforma de coinversión española autorizada por el supervisor bursátil que permite a particulares invertir en proyectos de energía limpia con un desembolso mínimo de 500 euros.

Nacho Bautista, su consejero delegado, y **Adrián Bautista**, su hermano y director de operaciones de la firma, empezaron a darle vueltas al proyecto en 2016. Cada uno de estos dos ingenieros abulenses pidió un crédito de 20.000 euros y con ese capital arrancaron Fundeen, solo después de un exhaustivo procedimiento de autorización por parte de la CNMV que se extendió durante un año y medio.



Hoy, la empresa ya ha gestionado alrededor de 14 millones de euros en coinversión en proyectos verdes y repartido más de dos millones en beneficios entre los inversores, principalmente particulares. Entre los promotores con los que han trabajado se incluyen campeones nacionales como **Endesa**, **Forestalia**, **Ignis**, o **Soltec**. Nacho Bautista asegura que la firma está trabajando con "todas las *utilities* de España y grandes fondos de inversión", que buscan sus servicios "no porque seamos una herramienta de financiación alternativa, sino porque somos una herramienta social". "Al final, los proyectos duran muchos años y lo mejor es que los vecinos caminen a tu lado, no que sean tu oposición más fuerte", resume el CEO.

Existen dos vías de coinversión ciudadana. La primera consiste en la entrada en el capital de los parques, algo que ya imponen CCAA como Baleares, Navarra o Canarias. Es la vía más compleja, pues con su inversión los ciudadanos obtienen derechos políticos, de voto, que, sin embargo, resultan insuficientes para ser decisivos en la toma de decisiones del parque. "A priori, los promotores no muestran especial inclinación por esta fórmula, pues es complejo dar entrada en el capital a entes no profesionalizados que, además, no necesariamente han asimilado que invertir supone riesgo", afirma Monroy y asegura que hay empresas que, incluso, han descartado instalarse en CCAA que obligan a esto.

La segunda opción, la preferida por los promotores según la literatura financiera, es la participación mediante deuda, o *crowdlending*, lo que evita tener que regular esos derechos políticos. Esto encaja mejor con un modelo en el que muchos pequeños inversores buscan rentabilidades jugosas sin involucrarse en la gestión de un proyecto donde, en cualquier caso, con una participación minoritaria no podrían decidir.

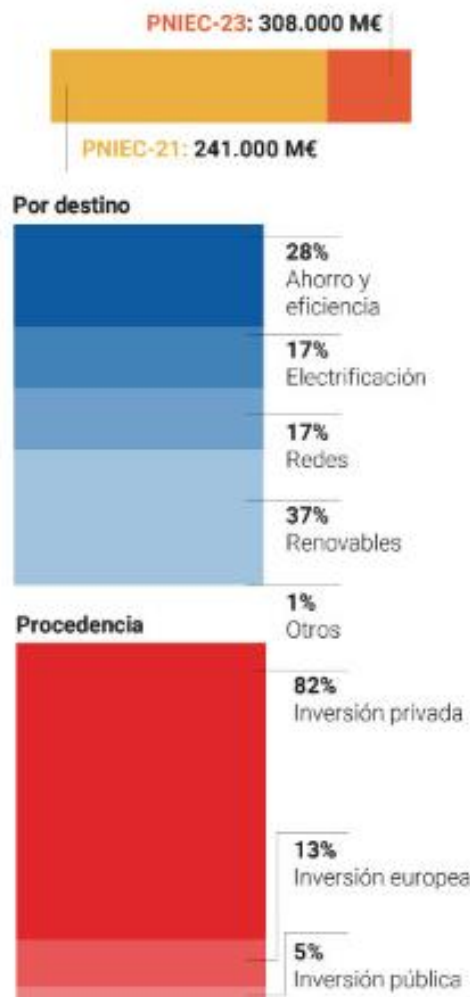
El CEO de Fundeen detalla que los proyectos que están gestionando ofrecen rentabilidades medias del 7% con plazos de retorno muy diversos. Para que el lector pueda hacerse una idea, la rentabilidad de las Letras del Tesoro, que han causado una verdadera fiebre entre los pequeños ahorradores en los últimos años, rondaba el 3%, remuneración que hoy no supera ningún depósito bancario. Aunque depende de cada parque, de media, el inversor empieza a recibir beneficios al cabo de entre 5 y 10 años.

LA ESTELA EUROPEA

El *crowdlending* es un compañero de viaje sobradamente conocido para las renovables en Europa. En Francia, donde ya han recurrido a esta fórmula unos 500 proyectos verdes, las subastas de energías limpias ofrecen bonificaciones a aquellas iniciativas con inversión ciudadana. En Alemania, las cooperativas e inversores locales colaboran con frecuencia con instituciones públicas de crédito y bancos para mejorar sus condiciones de participación en las renovables. Algunas de las plataformas de inversión líderes germanas, como **Exporo**, tradicionalmente vinculada al inmobiliario, se han lanzado al mundo verde, animadas por su buena acogida.

El crecimiento de este modelo ha sido exponencial también en Reino Unido, donde las principales plataformas de financiación participativa han canalizado más de 300 millones de euros en los últimos cinco años. En Países Bajos se han levantado más de 275 millones en 225 proyectos renovables y de economía circular, algunos con una demanda de inversión ciudadana de más de 20 millones.

INVERSIÓN VERDE TOTAL PARA 2030



De vuelta a España, según las proyecciones de Fundeen, el mercado potencial de la coinversión en renovables alcanza los 135,9 gigavatios (GW) y asciende a 5.601 millones de euros. La cifra es el resultado de sumar toda la capacidad de generación sujeta a concursos, donde el Gobierno ya ha introducido criterios socioeconómicos que apuntan en esta dirección (2.145 millones de euros potenciales); aquellos proyectos competencia de las CCAA que han legislado en aras de la coinversión ciudadana (2.850 millones); y los parques que están sujetos a un régimen de subvenciones cuya letra pequeña incluye este tipo de mecanismos de participación (606 millones).

Endesa es uno de los primeros gigantes nacionales que han explorado este camino. A finales de octubre, la eléctrica lanzó, de la mano de Fundeen, una iniciativa exclusiva para los vecinos, instituciones y empresas de los **34 municipios del entorno del Nudo de Transición Justa de Andorra**. Allí, Endesa tiene en marcha un plan de acompañamiento destinado a mitigar el golpe del cierre de la central de carbón que gestionó durante años en la región.

"Llevábamos mucho tiempo difundiendo el proyecto a pie de calle y estamos muy contentos con la acogida", asevera Ramón White, responsable del proyecto, quien celebra que en menos de un mes han captado **100.000 euros y 55 inscritos formales**. El objetivo máximo fijado es de dos millones de euros. "El proyecto implica una inversión total de unos 1.700 millones, es decir, el interés de Endesa aquí no es financiarse con estas aportaciones ciudadanas, sino implicar al territorio y reforzar nuestra licencia social para operar en la región", zanja.